



Gestión en Trabajo

Si el éxito se midiera por la capacidad de avanzar en una agenda programática, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), tal vez emergería como la más eficaz entre los miembros del actual gabinete. Es cierto que otros secretarios de Estado, como la ministra Carolina Tohá, pueden exhibir un número importante de proyectos aprobados en su área; la diferencia es que iniciativas como la Ley Naín-Retamal o la legislación sobre usurpaciones nada tienen que ver con el proyecto original de este gobierno y corresponden a una agenda impuesta por los hechos. Incluso, la ley más emblemática de Tohá, la creación del Ministerio de Seguridad, fue una iniciativa de la administración Piñera.

La ministra Jara, en cambio, ha logrado sacar adelante proyectos que estaban en el ADN del oficialismo y que el discurso gubernamental se preocupa de resaltar hasta el hartazgo, como el alza del salario mínimo y la Ley de las 40 horas, para la que contó incluso con el concurso de la Confederación de la Producción y del Comercio. También la mano de Jara se ha hecho sentir en el avance de mociones impulsadas por grupos transversales de parlamentarios, como las que dieron origen a la Ley Karin y a la de Conciliación. Luego, por la vía administrativa, tanto mediante reglamentos como con dictámenes de la Dirección del Trabajo, su cartera ha impuesto controversias interpretaciones que han rigidizado y extremado la aplicación de esas leyes.

Ahora, con la aprobación de la reforma previsional —un logro compartido con el ministro de Hacienda— ha venido a sellar su gestión de eficaz ejecutora de la agenda gubernamental. El texto dista del proyecto original del Ejecutivo, pero

Jara —fiel al antiguo pragmatismo comunista, siempre atento a las correlaciones de fuerza y a aprovechar los espacios que se le den— ha sido transparente en precisar que esta reforma no cierra nada, sino al revés. “Para el progresismo se habilitan caminos transformadores”, dijo a Reportajes de “El Mercurio” el domingo. Misma entrevista en que ratificó su visión de que los administradores de fondos previsionales (AFP) “no debiesen existir”, pero “para avanzar, uno tiene que ir poniendo ciertos cimientos”. Más allá de corcovos, tal mirada de la reforma como un paso “habilitante” hacia otros objetivos terminó siendo apoyada por un

Partido Comunista dominado por los sectores más duros y donde incluso algunos ven a Jara como prescindible.

Pero en medio de tantos aplausos a la ministra, arriesga pasarse por alto una verdad incómoda: su responsabilidad en la “emergencia laboral” —como la llamó el economista David Bravo— que vive Chile. Una crisis donde las cifras de desempleo —más allá de la baja de diciembre— siguen siendo muy superiores a las de la década pasada y donde el país, cinco años después, aún no recupera los niveles de ocupación pre-pandemia; mientras, la informalidad y el subempleo avanzan, y solo la creación de empleo público muestra sólido dinamismo. En este contexto, la gestión de la secretaria de Estado no solo ha fracasado en generar condiciones que permitan al mercado laboral salir de su estancamiento, sino que la frondosa producción normativa por la que el oficialismo la celebra ha encarecido fuertemente los costos laborales, exacerbando el problema. Y es que, a la luz de las cifras, el éxito de la ministra no es el éxito de los trabajadores.

A la luz de las cifras, el éxito de la ministra no es el de los trabajadores.